



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-002-2016-00991-01
Demandante: Amanda del Carmen Montoya Giraldo
Demandado: Ciclomhar Ltda en Liquidación y Colpensiones
Asunto: Apelación
Procedencia: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Contrato de trabajo, aportes pensión, pensión vejez.

Medellín, julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte actora, respecto de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2020 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora AMANDA DEL CARMEN MONTOYA GIRALDO en contra de la sociedad CICLOMHAR LTDA EN LIQUIDACIÓN y de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Radicado 05001-31-05-002-2016-00991-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora AMANDA DEL CARMEN MONTOYA GIRALDO convocó a juicio a la sociedad CICLOMHAR LTDA EN LIQUIDACIÓN y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo con la sociedad Ciclomhar Ltda en Liquidación, desde el 01 de diciembre de 1980 y hasta el 30 de septiembre de 1999 y se ordene al empleador el pago de los aportes pensionales por el tiempo no cotizado. Adicionalmente se declare que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, en consecuencia, se condene a Colpensiones, al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales a partir del 25 de abril de 2012, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se afirmó que la señora Amanda del Carmen Montoya Giraldo nació el 25 de abril de 1957, que cuenta con 782.01 semanas cotizadas, pese haber sostenido una relación laboral con la demandada Ciclomhar Ltda en liquidación desde el 01 de diciembre de 1980 y el 30 de septiembre de 1999, equivalentes a 972 semanas.

Se expuso que por problemas de índole económico Ciclomhar Ltda en Liquidación, dejó de hacer los aportes patronales, pues entre los años 1980 y 1999 cotizó escasas 717 semanas, acotando que, de haberse efectuado el pago por todo el tiempo de servicios, el actor reuniría con creces las exigencias del

Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, prestación que solicitó a Colpensiones el 21 de junio de 2016, sin haber obtenido respuesta.

1.2.- CONTESTACIÓN

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, al dar respuesta a la demanda aceptó como cierta la fecha de nacimiento de la demandante, que la misma cotizó 782.01 conforme a la historia laboral y que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, aclarando que la prestación le fue negada mediante resolución GNR 107222 de 2012, en relación a las demás afirmaciones de la demanda, señaló no constarle las mismas por ser ajenas al ámbito de conocimiento de Colpensiones.

No se opone a las pretensiones formuladas contra el empleador Ciclimhar, pero sí a las presentadas contra la entidad, para lo cual propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de Colpensiones de recibir aportes a seguridad social retroactivamente; inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez bajo los parámetros del régimen de transición; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación; prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Toda vez que la sociedad **CICLOMHAR LTDA EN LIQUIDACIÓN** no compareció al proceso, se procedió con su emplazamiento y le fue nombrado Curador ad Litem, quien, al replicar la demanda, aceptó como cierta la fecha de nacimiento de la accionante, indicó no constarle los demás hechos y atenerse a lo que se pruebe en el proceso, aduciendo que no tiene argumentos para oponerse a las pretensiones, sin embargo, formuló las excepciones de prescripción de la acción; compensación; pago y la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 27 de noviembre de 2020, el Juzgado de conocimiento absolvió a las demandadas de todas las pretensiones de la demanda, declarando configurada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez bajo los parámetros del régimen de transición e impuso condena

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del actor interpuso recurso de apelación frente a la providencia de primera instancia, indicando que se aparta de la decisión por cuanto el juez da por sentado que la relación laboral de la actora se dio entre el 1° de diciembre de 1980 hasta agosto de 1996, premiando la negligencia de los empleadores en el cumplimiento de sus deberes como patrón, no da crédito a la prueba testimonial que reposa en el expediente, cuando es la propia familia quien conoce los asuntos de sus integrantes, siendo más sospechoso que sea una persona ajena, quien señale una fecha exacta de la relación laboral, por lo que no se puede deslegitimar la razón del dicho de un testigo por el vínculo familiar.

Sostuvo que se encuentra probado en el plenario con la prueba testimonial y documental, que existen cotizaciones en mora, no aparece novedad de retiro, recordando que el no pago de cotizaciones y salarios es una conducta que da origen a la terminación unilateral de la relación laboral, reiterando que existe prueba de la relación laboral hasta 1999 y existe un documento donde Colpensiones, inicialmente, reconoce que hay cotizaciones en mora hasta 1999, por lo que no se puede premiar al empleador diciendo que la relación laboral llega hasta el momento que se pagó, porque eso es decir que si no se paga no existe relación laboral.

Concluye afirmando que acreditada la relación laboral hasta el año 1999 se cumple el requisito de las 1000 semanas para que la demandante acceda a la pensión de vejez, existiendo igualmente un incumplimiento por parte de Colpensiones de realizar las gestiones de cobro necesarias para que el empleador pague las semanas, sin que se pueda sustentar el fallo en un documento posterior de Colpensiones de 2015, donde dice que no hubo un periodo de mora hasta el 1999 sino hasta otra fecha, razón por la cual solicita se acceda a las pretensiones de la demanda.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Colpensiones, informado que con el empleador Ciclomhar Ltda existe registro de cotizaciones en favor de la actora del 17 de agosto de 1979 al 31 de agosto de 1996, sin registro de novedad de retiro para dicho momento., que la entidad realizó la validación de los periodos que se aducen en mora mediante requerimiento interno No. 2016_5647829 del 30 de junio de 2016, obteniendo como resultado que no se reportan datos actualizados de ubicación del empleador CICLOMAR LTDA y verificada la información pública suministrada se verifico en la Cámara de Comercio que el empleador reporta la vigencia 1997 como último año renovado de la matrícula mercantil, razón por la cual no fue posible iniciar acción de cobro por la causal no localizado; resaltando que el empleador realizó el último aporte pensional para el afiliado en el ciclo 1996/08, por lo que se presume una posible omisión en la novedad de retiro y no se evidencia documentación que aclare los extremos laborales, por lo que solicita se confirme la sentencia de primera instancia, pues es claro que la accionante no reúne el número mínimo de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Es de anotar, que, si bien la providencia apelada fue proferida el 27 de noviembre de 2020, el Juzgado de conocimiento solo remitió el expediente a esta Corporación el 2 de mayo del año en curso.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora Amanda del Carmen Montoya Giraldo nació el 25 de abril de 1957, conforme a la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 46 del anexo 01 del expediente digital.
- Que la actora solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez el 7 de noviembre de 2012, prestación que le fue negada mediante resolución GNR 010722 del 28 de noviembre de 2012 (anexo 12 expediente digital)

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia proferida el 27 de noviembre de 2020, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si entre la señora Amanda del Carmen Montoya Giraldo y la sociedad Ciclomhar en Ltda. en Liquidación existió una relación laboral, desde el 1º de diciembre de 1980 al 30 de septiembre de 1999?

¿Si como consecuencia de la existencia del vínculo laboral, hay lugar a ordenar el pago de los aportes al sistema de seguridad social pensional no cancelados por el empleador; asimismo, determinar si la gestora del proceso tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) en este caso no quedó acreditada la mora del empleador, en tanto no se estableció la vigencia del vínculo laboral por los ciclos 01 de agosto de 1996 al 30 de septiembre de 1999, (ii) la demandante no acredita el número de semanas mínimas exigidas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece:

“El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, justo con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno. “El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.

A su vez el artículo 24 ibídem preceptúa:

Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo

La Corte Constitucional en la sentencia C-177 de 1998, se refirió a la procedencia de la inclusión de semanas en mora por parte del empleador, para el reconocimiento de las prestaciones a cargo del sistema, así:

“En cuanto dice relación con el incumplimiento del pago de los aportes por los empleadores al ISS, la Corte de manera reiterada, ha sostenido que no le es endilgable al empleado y menos aún, puede derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mora del patrono o empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le corresponden, junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado”.

“Dicho de otra forma, retenidos por el empleador, de la asignación salarial los valores que le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la obligación de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni pueden derivarse contra éste consecuencias negativas que pongan en peligro su derecho a la salud o a la

vida, o a una prestación económica de tanta importancia como la que representa la pensión de invalidez”.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, en una línea jurisprudencial pacífica y reiterada, que compendia la sentencia SL984-del 13 de marzo de 2019, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS en los siguientes términos:

“La cuestión planteada por la censura, se concreta a establecer si deben computarse los aportes pagados extemporáneamente para dilucidar el derecho pensional. Sobre el particular, esta Corporación de forma reiterada ha señalado que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores, de suerte que, de omitirse esta obligación, serán responsables por el pago de la prestación a que haya lugar, según la normativa aplicable.

En ese sentido se refirió la jurisprudencia de esta Sala, desde hace más de una década en providencia CSJ SL 32384, 28 oct. 2008, postura que ha reiterado invariable y pacíficamente desde entonces, en las sentencias CSJ SL907-2013, CSJ SL5429-2014, CSJ SL16814-2015, CSJ SL8082-2015, CSJ SL4818-2015, CSJ SL15718-2015, CSJ SL11627-2015, CSJ SL16814-2015, CSJ SL13266-2016, CSJ SL 4952-2016, CSJ SL6469-2016, CSJ SL15980-2016, CSJ SL17488-2016, CSJ SL13877-2016, CSJ SL685-2016, CSJ SL3707-2016, CSJ SL4892-2016, CSJ SL5166-2016, CSJ SL685-2017, CSJ SL3707-2017, CSJ SL4892-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL3301-2018 y CSJ SL5570-2018, entre otras.

Bajo esa línea jurisprudencial queda claro entonces que, a efectos de contabilizar las semanas cotizadas por el afiliado a fin de verificar si cumple o no con los presupuestos legales tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta a más de las consignadas oportunamente, las pagadas extemporáneamente y las que se encuentran en mora, dada la falta de gestión de cobro por parte de la administradora a la que se encuentre vinculado.

Ello es así, en criterio de la Corte, porque la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras.

Debe observarse que el precedente jurisprudencial, parte de la premisa de la inexistencia de discusión sobre la efectiva prestación del servicio del trabajador que causa el derecho de la cotización, por lo que, sin duda, para el reconocimiento de semanas en mora, se requiere establecer la existencia de la relación laboral por la cual surge, como también lo precisa la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1355 del 03 de abril de 2019, en la cual indicó:

“Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un corolario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y están dirigidos a garantizar al asalariado un ingreso económico periódico, tras largos años de servicio que han redundado en su desgaste físico natural. De allí que, precisamente, para que pueda hablarse de «mora patronal» es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria. Dicho de otro modo: la mora del empleador debe tener sustento en una relación de trabajo real.

En este caso, la recurrente pone en duda la existencia de un contrato de trabajo entre la empresa Flores Calima S.A. y Ana Francila Rodríguez en el periodo comprendido entre el mes de enero de 1996 y septiembre de 1999, dado que durante ese mismo lapso laboró con otros empleadores, así: (i) con Impulso Temporal Ltda. desde el 1.º de mayo de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998; (ii) con Otilia Flowers desde el 1.º de marzo de 1998 hasta el 31 de mayo de la misma anualidad; y (iii) nuevamente con Impulso Temporal Ltda., desde el 1.º de enero de 1999 hasta el 30 de septiembre de 1999.

Lo anterior lo corroboró la Sala con la historia laboral contenida en el CD de folio 98, en el cual se registra que en el periodo de 1996 a 1999, la demandante laboró con otros empleadores, lo que si bien es permitido por el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo, en este caso, le genera a la Sala una duda sobre la vigencia del contrato de trabajo con Flores Calima S.A. en los extremos temporales deducidos por el Tribunal, aspecto que se suma al considerable tiempo en que se extendió la mora.

A hechos como el presente, debe estar atento el juez del trabajo, pues si en un asunto surgen dudas razonables y fundadas frente a la existencia de las relaciones de trabajo sobre las que se edifica un reclamo de mora patronal en el

pago de cotizaciones, lo correspondiente es esclarecerlas. De esta forma, se garantiza que las condenas estén soportadas en tiempos de servicio efectivamente laborados, a la vez que se evita la concesión de pensiones a las cuales no se tiene derecho. Recuérdese que la legislación de la seguridad social también «se edifica sobre realidades y verdades» (CSJ SL413-2018). (subrayas de esta Sala).

Postura iterada, entre otras, en sentencias SL1040 de 2020, SL3845 de 2021 y SL 918 de 2022, última en la cual se puntualizó:

“Conforme a lo señalado, es dable colegir, que cuando existen periodos en mora por parte de algún empleador, le corresponde a la entidad de seguridad social ejercer las acciones de cobro y si no lo hace, esa inactividad no puede perjudicar los derechos del trabajador, por ende, deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre la existencia de vínculo contractual con el trabajador y la efectiva prestación del servicio por parte de éste, que es lo que da lugar al pago de aportes.

En otros términos, no puede el juez entrar a convalidar ciclos con una aparente mora patronal, sin tener la certeza de que en estos el afiliado tuvo un vínculo laboral, puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro, no puede conllevar de manera automática e inexorable a tener como efectivamente cotizado esos meses, de allí que es necesario, se insiste, que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral subordinado, esto es, que los períodos que se reclaman al empleador deben tener sustento en una relación de trabajo real.”

De otra parte, la prueba de la vigencia de la relación laboral corresponde al trabajador, en aplicación del principio de la carga de la prueba, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso.

*“Artículo 167. **Carga de la prueba.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.*

2.6.- CASO CONCRETO

En el asunto puesto a consideración de la Sala, no existe discusión en torno a la existencia de la relación laboral entre la señora Amanda del Carmen Montoya Giraldo y la sociedad Ciclomhar Ltda en Liquidación, estribando la controversia en determinar la fecha hasta la cual permaneció vigente la misma, toda vez que reclama la pretensora el pago de los aportes al sistema pensional desde agosto de 1996 y hasta el mes de septiembre de 1999, época para la cual sostiene feneció el vínculo laboral.

Reprocha el recurrente que el Juez de primera instancia diera por sentado que la relación laboral se dio entre el 1º de diciembre de 1980 y hasta agosto de 1996, considerando que se probó que el vínculo se extendió hasta septiembre de 1999 y se presentó una indebida valoración probatoria.

Al respecto debe indicarse que, acreditada la prestación personal del servicio, la misma debe cumplirse en unos extremos temporales, que corresponden al periodo de vigencia del contrato de trabajo, es decir, la fecha de inicio y de terminación, durante el cual se ejecutan las obligaciones derivadas del mismo, como lo es el pago de aportes al sistema de seguridad social.

Claro lo anterior, se advierte que de la prueba testimonial presentada por la accionante no es posible determinar que en efecto el extremo final de la relación laboral corresponda a septiembre de 1999, pues ninguno de los testigos ofrece claridad en este punto, en primer lugar, el señor JOSE MARIO MONTOYA GIRALDO, hermano de la pretensora, señaló que fue él quien llevó a su hermana a trabajar Ciclomhar Ltda, que ello ocurrió en 1980, que luego él se quedó como cuatro años más laborando en Ciclomhar y su hermana siguió trabajando, manifestando claramente que no tiene presente el

año en que se retiró la demandante, pues en sus palabras desapareció y cuando se dio cuenta Amanda ya no estaba allá, de ahí que, no le aporta nada el testigo a las aspiraciones de la accionante. En segundo lugar, la señora ELCY DEL SOCORRO JARAMILLO HERNANDEZ, afirmó que fue compañera de trabajo de la demandante en Ciclomhar, que la accionante empezó a trabajar ahí en el año 1979, sostuvo la declarante que ella laboró hasta 1980 en Ciclomhar, que luego como a los tres años volvió y estuvo tres meses y que la demandante trabajó con dicho empleador hasta que la empresa terminó que fue en 1999, advirtiendo que si bien sostiene la deponente como razón de su dicho que laboró en cafeterías alrededor de Ciclomhar, esa afirmación no resulta suficiente para tener por acreditado la vigencia de la vinculación contractual de la pretensora hasta 1999, pues la deponente solo laboró con la demandante hasta 1983 y no se acreditó en que cafetería prestó sus servicios laboró ni los periodos, sin olvidar que entre 1983 y 1999, transcurrió un lapso de 16 años.

A su vez, en el interrogatorio de parte rendido por la accionante, la misma sostuvo que salió de Ciclomhar cuando se acabó la empresa, lo que ocurrió en 1999, sin embargo se contradice cuando manifiesta que estuvo afiliada en salud al Seguro Social el tiempo que trabajó con la demandada, y que cuando se acabó el trabajo, su esposo la afilió al seguro de él, reposando en el plenario en el anexo 10 certificado de afiliación a la EPS Sura, con el cual se prueba que la activa presenta como fecha de ingreso a dicha entidad el 01 de abril de 1997, en calidad de beneficiaria de su compañero permanente, coligiendo, que si la afiliación de la actora en salud, ocurrió como lo reconoció la misma, después de finalizado el vínculo laboral, dicha finalización debió presentarse con anterioridad a abril de 1997, incurriendo de esta manera la accionante en una confesión.

Más aún se advierte que la prueba documental aportada, tampoco acredita que la relación laboral de la actora se hubiere prolongado hasta el año 1999, anotando que si bien en la historia laboral expedida por Colpensiones actualizada al 2 de julio de 2013, se registra mora presunta por parte del empleador Ciclimhar LTDA, desde agosto de 1996 hasta septiembre de 1999, ello solo permite acreditar que el empleador cesó en los pagos, sin efectuar novedad de retiro, por lo que dicho documento no es un medio idóneo, a partir del cual puede dejarse por sentado que el empleador efectivamente incurrió en mora y que se encontraba vigente el vínculo laboral, más cuando existen historias laborales posteriores, como la actualizada al 19 de junio de 2016, folios 41 y 42 del anexo 01 del expediente digital y la actualizada al 06 de octubre de 2020, que milita en la carpeta 07 del expediente digital, en las cuales solo se reportan las cotizaciones con el multicitado empleador Ciclomhar hasta agosto de 1996, volviendo la actora a reportar cotizaciones en enero de 2014, como independiente y a través del régimen subsidiado.

Bajo el anterior panorama y conforme al precedente jurisprudencial citado en las premisas normativas, al no estar acreditada la existencia de la relación laboral que alega la pretensora desde agosto de 1996 y hasta septiembre de 1999, no hay lugar a imponer condena alguna a cargo de Ciclomhar Ltda en Liquidación, ni a que se reconozcan como cotizados dichos periodos, imponiéndose la confirmación del fallo de primera instancia.

Respecto al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, baste anotar que conforme a la historia laboral obrante en la carpeta 07 del expediente digital, se tiene que la señora Amanda del Carmen Montoya Giraldo, cuenta con 910.71 semanas cotizadas, siendo claro, que, a fin de consolidar el derecho pensional, requería la actora que se reconociera la mora de su empleador, situación que no se demostró.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Medellín, el 27 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario instaurado por la señora AMANDA DEL CARMEN MONTOYA GIRALDO contra CICLOMHAR LTDA EN LIQUIDACIÓN y COLPENSIONES.

2.- Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO